

EL REGRESO AL CRECIMIENTO CERO DE LA ECONOMÍA SUPEDITADA A LA COYUNTURA ELECTORAL

- Luis Ignacio Román Morales* ▪

De 1982 a 1988, durante los primeros cuatro años del gobierno encabezado por Miguel de la Madrid, se presentó la peor caída multianual de la historia económica de México después de la gran depresión de 1929-1932. Durante esos cuatro años, el Producto Interno Bruto (PIB) de México registró una caída promedio del 0.3% anual. Antes y después de ese lapso, los primeros cuatro años parecían hablar del periodo de mejora en las condiciones del país. Entre 1935 y 1981, el crecimiento fue del 6.5% anual. Durante los primeros cuatro años del régimen de Carlos Salinas de Gortari (de 1988 a 1992) el PIB creció a un ritmo anual

* Es economista por la UNAM, maestro y doctor en Economía por la Universidad de París. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel II, y profesor titular en el ITESO.

del 3.7%, en los correspondientes al periodo de Ernesto Zedillo (de 1994 a 1998) fue del 2.5% y en los cuatro primeros años del sexenio foxista (de 2000 a 2004) fue del 1.6%. Durante el actual mandato se está manteniendo la tendencia hacia un comportamiento cada vez más débil e incierto, habiendo registrado un promedio de crecimiento sólo del 0.66% anual.

En efecto, visto desde una perspectiva de mediano y largo plazos, los procesos de liberalización económica no sólo no han producido un crecimiento más sano, vigoroso y sostenible, sino por el contrario, se tiene un crecimiento más raquítico e incierto, de nuevo tendiente a cero. Haciendo, metafóricamente, un *zoom* en el actual sexenio, sólo parece haber existido una expectativa favorable durante el primer año de gobierno (2007), cuando el PIB creció el 6.9%. Sin embargo, la situación posterior ha ido de mediocre a crítica. En 2008 tan sólo creció el 1.5%, en 2009 cayó 6.1% y del cuatro trimestre de 2009 al tercero de 2010 lo hizo en 4.3%, quedando el PIB del tercer trimestre de 2010 no sólo por debajo del de 2008, sino a niveles similares del de 2007.

En estas condiciones cabe preguntarse cómo es posible que, según los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el gran logro de 2010 haya sido la generación de 732 379 empleos.

A partir de la misma información primaria es posible elaborar cálculos tendientes a favorecer distintas percepciones de la realidad. Efectivamente, la cifra de trabajadores asegurados ante el IMSS pasó de 14 millones 6 mil en diciembre de 2009 a 14 millones 739 mil en el mismo mes de 2010. Sin embargo, las cifras de un solo mes de cada año no nos muestra la tendencia general durante el año. La misma Secretaría de Hacienda señala que la caída del empleo de diciembre se debió a un motivo estacional, pero omitió decir que los fuertes incrementos del empleo de octubre y noviembre también se debieron a los efectos estacionales previos a la llegada de la temporada navideña.

Una comparación más equilibrada de lo ocurrido entre 2009 y 2010 puede establecerse a partir de los valores anuales promedio. De este modo, el empleo se incrementó, en 2010, en 530 321 personas (27.6% menos de las cifras publicitadas por el gobierno), lo que indica una cierta mejora. Sin embargo, en esos mismos valores promedio anual, en 2009 se perdieron 441 448 empleos con respecto a 2008, lo que arroja un saldo de tan sólo 88 873 empleos creados a lo largo de dos años. Simultáneamente, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el promedio anual de la Población Económicamente Activa (PEA) se ha incrementado en 1 millón 533 mil personas entre 2008 y 2010 (de 45 millones 318 mil de trabajadores en 2008 a 46 millones 851 mil en 2010). Dicho en otros términos, los menos de 89 mil nuevos empleos generados no representan más que el 5.8% de los requeridos para integrar a la nueva PEA. Al igual que la producción tiende a un crecimiento cero, con el del empleo ocurre lo mismo, aunque con enormes variaciones estacionales.

Cabe agregar que el problema de la generación de empleo no es sólo de cantidad, sino también de calidad. Históricamente, el empleo permanente ha representado alrededor del 90% del total del número de trabajadores asegurados ante el IMSS. De hecho, aun en 2008, esta proporción era del 88.3%. Sin embargo, del empleo generado en 2010 (en valor promedio anual) el 39.1% fue para la contratación de trabajadores eventuales, trastocando profundamente la composición del empleo asegurado. Se está presentando un vuelco hacia la sustitución del trabajo permanente por el eventual, profundizándose la precarización del mismo y la incertidumbre sobre el origen, el monto y la estabilidad del ingreso de los trabajadores, lo que se complica aún más ante el envejecimiento de la población y su vulnerabilidad para mantener sus ingresos conforme avance su edad.

El cambio en la estructura del empleo asegurado hacia su precarización es más notable al comparar el año 2010 con 2008. Los 88 873 empleos generados en dos años son el producto de un aumento de 198 863 trabajadores eventuales y la caída absoluta de 109 990 permanentes. Conforme a la promoción de la imagen gubernamental en los medios masivos de comunicación, tal pareciera que los mexicanos debiéramos estar agradecidos por obtener un empleo eventual, mal pagado y sin prestaciones (o con una reducción significativa de éstas), porque parecería ser la única opción posible ante la pérdida de un empleo permanente en el que se cumplieran los mínimos derechos laborales.

De hecho, baste señalar los indicadores del sector manufacturero que publica el INEGI en su boletín de indicadores de coyuntura (www.inegi.org.mx). En octubre de 2010 había 6.7% menos obreros y 11.2% menos de empleados en las manufacturas mexicanas que en el mismo mes de 2006, en la víspera de la toma de posesión de Felipe Calderón. En lo que va del sexenio, los obreros han acumulado un crecimiento real del 3.8% en sus salarios, mientras que para los empleados el aumento ha sido del 1.4%, pero las prestaciones de ambos han caído en 2%. En otros términos, el poder de compra de los salarios, incluyendo prestaciones, también tiende a un crecimiento cero; lo que no tiende a cero es el número de trabajadores industriales... ahí los valores son notoriamente negativos.

En cuanto a la inflación, ésta ha estado relativamente controlada en niveles que rondan entre el 4% y 5% anual desde 2006, pero con impactos mayores en los estratos de menores ingresos. Así, el incremento acumulado de precios de noviembre de 2006 al mismo mes de 2010 ha sido del 21.9% para las familias que perciben ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos, mientras que dicho incremento fue significativamente menor, del 18.79%, para las familias con percepciones superiores a los seis salarios mínimos. Esto significa que la inflación es 14.2% menor para

los estratos de ingreso medio y altos, comparativamente con las familias de menores ingresos.

Los incrementos porcentuales a los salarios mínimos (promedio de las zonas A, B y C) han acumulado un crecimiento del 18.46% a lo largo del presente sexenio, hasta 2010, lo que arroja como saldo una pérdida en el poder de compra del 2.82% en el ingreso de los perceptores de, a lo sumo, tres salarios mínimos familiares. De nuevo, el saldo no sólo es tendiente a cero, sino de pérdida neta.

El año 2010 puede parafrasearse como “el año en que vivimos en peligro” y no se ve que en 2011 la situación vaya a ser menos delicada. La inseguridad pública parece reflejar la ruptura creciente de los mecanismos de cohesión social y la búsqueda individualizada por sobrevivir a todo costa, atravesando, eso sí, todo tipo de estrato socioeconómico. Los mecanismos económicos impulsados por el Estado han favorecido a las empresas, los empresarios, los sectores y las regiones con mayor poder económico, bajo un contexto de empobrecimiento social, volviendo la polarización más evidente. La promoción de las reformas estructurales para liberalizar cada vez más los mercados, ahora dirigiéndose de nuevo al energético y al laboral, implica un mayor convencimiento gubernamental de que el problema no está en la lógica de su política, sino sólo en la velocidad en que se aplica. No existe el menor cuestionamiento a su política, y la máxima del gobierno es que “vamos por el rumbo correcto”, repetido hasta el cansancio como dogma de fe y sin aceptación de postura crítica alguna, ya no se diga de la mínima capacidad autocrítica.

Esta lógica se sustenta en la búsqueda del fortalecimiento de los mercados, cuando en realidad están siendo debilitados, como se constata en las continuas caídas de la productividad media de la economía, de los indicadores de la competitividad y de la capacidad de captación de inversión productiva.

Cabe preguntarse, como reflexión, si realmente se busca fortalecer los mercados cuando México ha requerido contratar la línea de crédito más grande de su historia, 75 mil millones de dólares estadounidenses, para apuntalar sus reservas ante el incremento de la deuda externa, no del Estado, sino de los grandes corporativos privados mexicanos. Pareciera que la dependencia que México ha adquirido de la situación financiera de sus grandes corporativos es tal que esas empresas pueden heredar, impunemente, deudas intergeneracionales al conjunto del país (recuérdese el FOBAPROA o el rescate carretero). La transmisión intergeneracional de deuda no es una práctica capitalista sino feudal, no refuerza los mercados sino que cierra los circuitos económicos en espacios controlados de manera centralizada.

La lógica feudal también se manifiesta en la reproducción intergeneracional de privilegios, comenzando por la propiedad y la dirección de los grandes corporativos, mientras que se busca que la contribución fiscal sea cada vez más centrada en los gastos y no en los ingresos de los mexicanos, lo que proporcionalmente beneficia a quienes tienen más ingresos y representa cargas mayores para las capas medias y de bajos ingresos. El impuesto sobre la herencia no tiene importancia alguna en los ingresos públicos, mientras que toda la búsqueda de mayores fuentes de financiamiento viene por el lado de los impuestos al consumo. México no cuenta ni siquiera con una encuesta nacional sobre el patrimonio de los hogares, sino sólo sobre su ingreso en periodos determinados.

La lógica feudal también se manifiesta en prácticas rentistas, en las que sectores de intermediación financiera difícilmente apoyan a los sectores productivos que no se encuentren en una situación ventajosa, mientras que las ganancias se centran en actividades especulativas o en la obtención de rentas por créditos al consumo y no a la producción. El sector bancario en México apoya, fundamentalmente, los créditos para

casas, autos y tarjetas de crédito, mientras que las grandes empresas se financian por medio de sus proveedores. De nuevo, cuanto más débil es una empresa, más dificultades debe enfrentar.

México se profundiza como un paraíso de monopolios, donde un abarrotero difícilmente puede tener éxito en su empresa ante el avasallamiento de las grandes cadenas de comercio al detalle (Oxxo, Seven Eleven, etc.); una papelería difícilmente puede enfrentar a las grandes cadenas estadounidenses; una tlapalería poco puede ante Home Depot; Wall Mart parece haberse convertido en la nueva Secretaría de Comercio del país, al menos en su papel de regulación de precios; los dos giros de establecimientos industriales más frecuentes en México, tortillerías y panaderías, se encuentran uno dirigido por el proveedor que controla la masa de maíz (Maseca) y el otro amenazado por la inmensa penetración de Bimbo. La “información” (así, entrecomillada) preponderante que recibimos proviene de un duopolio televisivo y de un puñado de empresas radiales y periodísticas; la construcción en gran escala está controlada por una o dos grandes empresas de infraestructura (ICA y CARSO) y una sola gran productora de cemento (Cemex); la de vivienda, por un pequeño grupo de grandes constructoras de pequeñísimas y precarias habitaciones; la de cerveza, por tan sólo dos empresas y hasta las cafeterías parecen ir desapareciendo ante el brote masivo de los Starbucks. Igualmente podrían referirse los casos de farmacias, cadenas de hoteles, de restaurantes, de hospitales, etc. Ello no significa una promoción de las empresas o de la competencia, sino del aniquilamiento de la posibilidad de formación de empresas y del desarrollo de iniciativas individuales, grupales o comunitarias ante el peso de esta estructura de mercado hiperconcentrada. Esto de ninguna forma representa una promoción del “libre” mercado, sino una práctica de reproducción de formas cerradas

de control del poder. Finalmente, son mecanismos más cercanos a estructuras feudales que capitalistas.

En todo caso, es difícil pensar en una sociedad abierta, cuando los propios tomadores de decisiones económicas en la esfera pública son los mismos, o provienen del mismo grupo de poder desde la década de los ochenta, independientemente de cuál sea el partido gobernante. Es difícil que pueda impulsarse una sociedad más abierta y equitativa cuando el propio secretario de Economía se ha distinguido, en su formación, por sus elogios al célebre Marcial Maciel.